

FOJA: 39 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 1º Juzgado de Letras de Talca
CAUSA ROL : C-693-2021
CARATULADO : ÁVILA/FISCO DE CHILE

Talca, veintitrés de Noviembre de dos mil veintidós.

Visto:

El día 13 de abril de 2021, a folio 1, don Víctor Hugo Ramírez Valenzuela, abogado, en representación judicial y convencional de don Gabriel Elizardo Ávila Sepúlveda, cédula de identidad N° 7.824.819-K, dependiente, con domicilio en calle Arturo Alessandri N° 2177, comuna de Tomé, viene en deducir demanda en juicio ordinario en contra del Fisco de Chile, representado por el abogado procurador fiscal don José Isidoro Villalobos García Huidobro, domiciliado en calle 1 poniente con 1 y 2 sur N° 1055 de Talca, a fin de obtener reparación e indemnización de perjuicios por el perjuicio que provocó al demandante de autos la ejecución (desaparición) de su hermano Roberto Iván Ávila Sepúlveda, solicitando que se condene al Fisco de Chile al pago de una indemnización por concepto de acción reparatoria indemnizatoria de \$200.000.000, más reajustes e intereses, o la suma que el tribunal estime.

El día 24 de junio de 2021, a folio 10, don José Isidoro Villalobos García-Huidobro, Abogado Procurador Fiscal de Talca del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar las acciones deducidas en todas sus partes o, en subsidio, rebajar los montos indemnizatorios pretendidos, con costas.

El día 25 de junio de 2021, a folio 12, la demandante evacua trámite de réplica solicitando desestimar las excepciones perentorias y alegaciones deducidas por la demandada, e indicando que resulta necesario acoger la demanda de autos para reestablecer la justicia en plenitud.

El día 06 de julio de 2021, a folio 16, la demandada evacua trámite de dúplica, solicitando fallar en consecuencia.

A folio 18, de fecha 09 de julio de 2021, se recibe la causa a prueba, rindiéndose la que rola en autos.

A folio 36, de fecha 09 de mayo de 2022, se cita a las partes a oír sentencia.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que refiere el actor en la demanda, en cuanto a los hechos, que el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación señala que se llegó a la conclusión de que los derechos humanos de don Roberto Ávila fueron gravemente violados por Agentes del Estado. Respecto de cómo sucedieron los hechos en virtud de los cuales don



Foja: 1

Roberto Ávila fue desaparecido, tanto en el Tomo I del Informe Rettig, como en el Tomo 3 del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se da cuenta de un reconocimiento expreso que realiza el Estado de Chile en cuanto a dar certeza de que efectivamente el hermano del demandante fue víctima de un delito de lesa humanidad.

Indica el libelo que se realizó, por parte de la familia, una serie de gestiones judiciales respecto de la desaparición de don Roberto Iván Ávila Sepúlveda, con la finalidad de obtener información sobre su paradero; el 02 de julio del año 1975 se presentó ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Chillán un recurso de amparo en su favor, el que rola bajo el N° 95.679 de ese año, siendo desestimado. El 07 de julio del año 1975, en el 2° Juzgado del Crimen de Chillán, se instruyó la causa Rol N° 43.973 en que se dio una amplia orden de investigar, sin resultado positivo. Así las cosas, ninguna gestión judicial dio ningún resultado positivo respecto de encontrar la verdad de la desaparición de don Roberto.

Respecto a la situación particular del actor, se relata que el 03 de octubre del año 1973 don Gabriel y su familia fueron informados de que su hermano Roberto estaba detenido en la Cárcel de Chillán. Esa tarde, la madre del actor, doña Dora, le informa que no se conoce el paradero de Roberto. Luego de ese día comenzó la búsqueda de su hermano, siendo muchas las oportunidades en que el paradero de Roberto les fue negado, provocando un decaimiento en cada integrante de la familia, cayendo en una profunda depresión que les impidió continuar con su vida normal.

Debido a la desaparición de su hermano, se relata que el actor debió abandonar sus estudios de enseñanza media no pudiendo ir a la Universidad porque todos los esfuerzos familiares, de tiempo y económicos, se destinaron a la búsqueda de su hermano Roberto, quien a la postre, jamás apareció. Esto lo condicionó que desde los 16 años se viera abandonado, sus padres cesaron en su labor de contención para con su persona, debiendo soportar la llegada de la adultez solo y sin contención de su familia.

El año 1976 y de manera informal la familia fue informada de que don Roberto había sido acribillado en el puente “Lala”, sobre el Río Ñuble. Desmoronados emocionalmente, la búsqueda de don Roberto cambió, ahora buscaban sus restos, ya no su persona. Con el pasar de los años y pese a estar sumido en la pena y en el dolor junto a su familia, don Gabriel comenzó a trabajar, desempeñándose por 5 años como cartero para Correos de Chile en Tomé, desde donde fue despedido cuando supieron que era hermano de Roberto Ávila. Su madre falleció en 2002 y su padre en 2004, ambos sumidos en profundo dolor, jamás supieron lo que ocurrió con el cuerpo de Roberto, marcando la vida del actor hasta el día de hoy, quien incluso modificó su personalidad.

Se precisa, en cuanto al sujeto pasivo de la acción reparatoria e indemnizatoria de autos, que ella se ha dirigido exclusivamente contra el Estado de Chile, el agente que participó en la ejecución de don Roberto Iván Ávila Sepúlveda cumplió la condena que



Foja: 1

impuso en su contra el Poder Judicial, razón por la cual y por un sentido de prudencia, limita su responsabilidad en la dimensión penal por él asumida.

En cuanto al derecho, refiere la demanda que la desaparición y evidente ejecución de don Roberto Iván Ávila Sepúlveda, forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la Comunidad Internacional como de Lesa Humanidad según lo establecido en el Estatuto Militar de Nüremberg del año 1945, actualizada con la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobada el año 1998. Indica que existe casi unanimidad en la doctrina y en la jurisprudencia que la responsabilidad de los órganos del Estado por las lesiones que puedan causar afectando derechos de las personas se funda en normas de derecho público y no en normas de orden privado, como serían las de la responsabilidad aquiliana. Señala que concurren dos fuentes normativas principales, una, es la propia Constitución Política del Estado y, otra, de derecho público internacional en materia de derechos humanos como es la que deriva de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras. Cita para aquello, dentro de la normativa interna, el inciso 2° del artículo 38 de la Constitución Política, norma que debe ser interpretada al tenor de lo señalado en el artículo primero inciso 4° y en el artículo quinto inciso 2° del mismo cuerpo normativo, de lo que se desprende que se está en presencia de lo que se denomina responsabilidad objetiva del Estado, cuyos requisitos de procedencia indica.

Refiere que en el caso de don Roberto Ávila, existe un reconocimiento administrativo y judicial por parte del Estado de Chile de que fue víctima de delito catalogado como de lesa humanidad, de manera que la falta de servicio resulta obvia y evidente.

En relación a la normativa internacional sobre Derechos Humanos, no hay duda que el actuar de los Agentes de Estado que ejecutaron al padre y hermano del actor en el contexto político producido constituyó un delito de lesa humanidad, violándose el derecho a la integridad personal, protegido por el artículo 5° de la Convención Americana de Derechos Humanos y con ello la obligación general de respeto de los derechos esenciales del hombre que han adquiridos los Estados, en particular, el chileno a través de la suscripción de convenciones y la aprobación de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (sic). Además, refiere la infracción de normas contenidas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En cuanto al deber de reparación que tiene el Estado de Chile respecto de las víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, expresa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó -con fecha 29 de noviembre de 2018, en los autos denominados “Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile”- un fallo clarificador en cuanto a establecer que el Estado de Chile es responsable de los delitos de Lesa Humanidad cometidos por sus agentes en período de Dictadura Militar y tiene la obligación de reparar a las víctimas, resultando importante, además, porque fija la postura del país



Foja: 1

frente a la comunidad internacional al tratar el tema de la prescripción respecto de demandas de reparación motivadas por delitos de lesa humanidad, estableciendo que no es aplicable la prescripción civil a acciones que procuren reparaciones por daños y perjuicios ocasionados por ese tipo de hechos, expresada en el motivo 90, 91 y 92 de dicha sentencia.

Por las consideraciones anteriormente descritas, solicita se condene al Fisco de Chile a pagar, por concepto indemnización moral, la suma de \$200.000.000 en beneficio de su representado, don Gabriel Elizardo Ávila Sepúlveda, o la suma que se determine, más intereses y reajustes.

Segundo: Que, a folio 10, de fecha 24 de junio de 2021, comparece don José Isidoro Villalobos García-Huidobro, Abogado Procurador Fiscal de Talca del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, contestando la demanda en el siguiente tenor:

Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes, hermanos de la víctima (sic). Señala que la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas, obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, la suma total de \$992.084.910.400.

Afirma que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo familiar más cercano; esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Al respecto, refiere que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso del demandante de autos, fue preteridos por la ley como beneficiario de una asignación en dinero por el daño que invoca, sin que ello implique afirmar que no haya obtenido una reparación satisfactiva por otra vía.

En suma, la pretensión económica demandada es improcedente porque, en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los hermanos de los causantes.

Sin perjuicio de lo anterior, el actor preterido ha obtenido reparación satisfactiva en cuanto demanda por la detención y desaparición de su hermano, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible



Foja: 1

reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.

También, afirma que en el caso de las personas como las de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica. Entre ellas destacan la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago; el establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el establecimiento del Premio Nacional de Derechos Humanos; y la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo del país. Además, refiere que el demandante de autos es titular por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

Afirma que como las acciones de autos están basadas en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, es que se opone formalmente la excepción de reparación satisfactiva a las acciones deducidas por la contraria, por haber sido ya indemnizada en cuanto al daño sufrido por el secuestro de su respectivo hermano, mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud.

Además de la excepción de reparación satisfactiva opone, en subsidio, excepción de prescripción extintiva de la acción deducida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2332 el Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal. Afirma que de acuerdo al relato del actor, la detención y desaparición de don Roberto Iván Ávila Sepúlveda, se produjo el 03 de octubre de 1973, y que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período del gobierno militar, iniciado en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aún, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 21 de abril de 2021, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso que se estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2.515 del Código Civil.

Menciona que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y necesita de una declaración explícita que en este caso no existe.



Foja: 1

Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad, para lo cual cita sentencia del Pleno de la Excma. Corte Suprema, de 21 de enero de 2013, dictada en causa Rol 10665-2011, entre otras.

En relación con las alegaciones expuestas por el actor, en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación de los daños reclamados es imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, indica que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución N° 2.391 de 26 de noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1° letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad; pero cabe señalar -tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema- que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales. Asimismo, expresa que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto el Máximo Tribunal; igual caso con la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y Convención Americana de Derechos Humanos, citando, en este último caso, sendos fallos de la Excma. Corte Suprema. De esa forma, no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada al ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, deben aplicarse las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado y, con su mérito, declarar prescritas las acciones civiles deducidas.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y el monto pretendido: con relación al daño moral, hace presente que la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, esto es, \$200.000.000 en total, resulta excesiva, teniendo especialmente en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los tribunales de justicia.

En subsidio de las excepciones de reparación y prescripción de la acción deducida, el demandado alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los



Foja: 1

hechos de autos, se debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por el actor de parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123, 19.980) y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria, alega que implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. También alega que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia.

Respecto del pago de reajustes e intereses, menciona que, en el improbable evento que se acogiere la demanda y se condene al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada.

Finalmente, con respecto a las costas de la causa, hace presente que la parte demandante no solicitó condena en costas.

Por dichas consideraciones, solicita tener por contestada la demanda civil deducida en autos y, en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar las acciones deducidas en todas sus partes, con costas, o en subsidio, rebajar los montos indemnizatorios pretendidos en razón de los fundamentos mencionados.

Tercero: Que a folio 12, con fecha 25 de junio de 2021, la demandante evacua réplica indicando, en cuanto a la excepción de improcedencia de la indemnización dineraria por preterición legal del demandante, advierte que no existe norma alguna que establezca la falta de legitimación activa de su representado, por el contrario, respecto de éste y en su calidad de víctima del daño moral que le irrogó la desaparición de su hermano tiene plena capacidad para demandar la reparación de dichos daños. Advierte además, que el Fisco de Chile hace una distinción arbitraria, estableciendo sin ninguna norma legal que ampare su postura, que el actor tiene derecho solo a reparaciones simbólicas, respecto del secuestro y desaparición forzada de su hermano, por lo que la excepción de improcedencia de la indemnización dineraria por preterición legal del demandante debe ser desestimada.

En cuanto a la excepción de reparación satisfactiva, refiere que todas las reparaciones indicadas en la contestación se refieren al cumplimiento de una obligación que mantiene el Fisco de Chile para con la comunidad internacional y no dicen relación alguna con el dolor que le ocasionó al actor los hechos de que da cuenta la demanda de autos. Indica, asimismo, que no existe incompatibilidad en la reparación efectiva del daño provocado por agentes del Estado en período de dictadura militar y los beneficios obtenidos por las víctimas de estas acciones. Afirma su pretensión citando al efecto los fallos dictados por la Excm. Corte Suprema de Justicia: de fecha 01 de diciembre de



Foja: 1

2016, en autos Rol N° 83.348-2016; de fecha 21 de julio de 2016, en causa Rol N° 20580-2015; y de fecha 21 de junio de 2016, en autos Rol N° 9757-2015.

Respecto a la excepción de prescripción, indica que ella debe ser analizada entendiendo que la acción deducida se refiere a hechos que constituyen violaciones de derechos humanos cometidos por agentes del Estado en contra del demandante, lo que es relevante para determinar si la misma prescribe por aplicación de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil. Es más, concluye en este sentido que no es factible aquello, toda vez que el período en que se cometieron dichas violaciones fue excepcional dentro de la historia del país, lo que es reconocido por la propia demandada al fijar subsidiariamente como inicio del plazo de prescripción de la presente acción “la restauración de la democracia” y no solamente la fecha en que ocurrieron los hechos. De este modo, resulta evidente que ante dicha situación de excepcionalidad jurídica no resulta posible aplicar la normativa que pretende la demandada.

Argumenta el demandante que resulta innegable que por fundarse la acción en la reparación de perjuicios por delitos cometidos por el Fisco de Chile catalogados como de “lesa humanidad”, son imprescriptibles al tenor de los tratados internacionales ratificados por Chile y no solamente en su fase penal sino también en la civil, pues de modo contrario se afecta el derecho de las víctimas a obtener una reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de violaciones a los derechos humanos, por aplicación directa de los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto al deber de reparación, cita el fallo dictado por la Corte Internacional de Derechos Humanos con fecha 29 de noviembre de 2018, en la causa “Caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile”.

Indica que, a diferencia de lo que señala la contraria en cuanto a que la Convención Americana de Derechos Humanos no tendría aplicación en estos casos por haberse suscitado éstos antes de la publicación de ella en el Diario Oficial (05 de enero de 1991), ello -atendida la “Reserva” realizada por el Estado de Chile al ratificar dicho tratado- las normas denominadas como “Ius Cogens” tienen el carácter de aplicación obligatoria para los Estados, por lo que el país mantiene la obligación adquirida internacionalmente de respetar las normas que contienen dicho tipo de normativa sin perjuicio de las indicaciones con que se promulguen. Si ese fuera el caso se estaría afectando la Buena Fe Internacional y el correcto cumplimiento de los Tratados Internacionales por parte de nuestro país. Cita al efecto, varios fallos dictados por la Corte Suprema de los que se desprende que la imprescriptibilidad de las acciones penales deducidas por delitos de lesa humanidad rige también para el ámbito civil desestimando que estas últimas, por su naturaleza patrimonial, sean regidas por normas de carácter civil, ello, atendidas las normas de ius cogens incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Constitución Política de la República. Alude, a mayor abundamiento, a la norma del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.



Foja: 1

En cuanto a la regulación del daño moral y a los intereses, refiere que no procede considerar los pagos que el actor ha recibido a lo largo del tiempo, conforme a las leyes de reparación, pues la naturaleza de los mismos no guarda relación alguna con las indemnizaciones que se solicitan en estos autos. Además, en cuanto a la cantidad demandada, su representado da cuenta del dolor y aflicción que le irrogó el daño provocado por la desaparición forzada de su hermano, don Roberto Ávila, víctima de delitos de lesa humanidad, lo que deberá ser evaluado por el tribunal.

Refiere que deben necesariamente desestimarse las excepciones perentorias y alegaciones deducidas por la demandada, acogándose la demanda para reestablecer la justicia en plenitud.

Por estas consideraciones solicita tener por evacuado el trámite de réplica.

Cuarto: Que a folio 16, con fecha 06 de julio de 2021, la demandada evacua el trámite de dúplica señalando, en cuanto a la excepción de preterición legal del demandante, tal como se indicó en el escrito de contestación, el Estado enfocó su dirección hacia la reparación económica de los familiares más directos, esto es, el núcleo familiar más cercano, constituido por los padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad, quienes fueron excluidas. Sin embargo, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en el programa para reparar el daño moral.

Con respecto a la excepción de reparación satisfactiva, reitera lo señalado en la contestación de demanda, y precisa que tales prestaciones fueron claramente indemnizatorias. Hace presente que alegó una excepción de reparación, en base a los planteamientos allegados al Informe Final de la Comisión Verdad y Reconciliación en que se consignaron una serie de “propuestas de reparación” compuestas de diversas prestaciones, sin que éstas tuvieran únicamente una naturaleza dineraria, concluyendo que las indemnizaciones demandadas sean improcedentes, por ser incompatibles con los beneficios ya otorgados por el Estado, todo lo cual constituye una excepción de reparación, y no solo una incompatibilidad.

En cuanto a la excepción de prescripción expresa que, al tenor del derecho interno y de la jurisprudencia reiterada, los tratados citados no establecen conceptos de imprescriptibilidad como los que se alegan. Asimismo, refiere que existen reiterados pronunciamientos de la Excm. Corte Suprema que han acogido la procedencia de aplicar normas de derecho común relativas a la prescripción, dando por reproducido lo consignado en el escrito de contestación.

En relación con las alegaciones subsidiarias, viene en reiterar lo señalado en su contestación, en relación a los montos solicitados por el actor y la imputación de lo recibido por éste a lo que eventualmente se conceda.

Finalmente, en cuanto a la alegación subsidiaria sobre reajustes e intereses, señala que no procede condenar a su representado al pago de unos y otros en tanto no exista



Foja: 1

una sentencia ejecutoriada que así lo disponga y que, además, se persiga su cumplimiento por la parte vencedora.

Quinto: Que a folio 18, con fecha 09 de julio de 2021, se recibe la causa a prueba por el término legal, fijándose como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1. Efectividad de que la demandada ha ocasionado perjuicios al demandante. Hechos causantes del daño. Relación de causalidad entre actos realizados por la demandada y el daño causado. Hechos que lo acrediten; 2. Naturaleza y monto de los perjuicios. Hechos que lo acreditan; 3. Efectividad que el demandante ya ha obtenido reparación por parte de la demandada, respecto de los hechos que causaron el perjuicio del actor. Hechos que acrediten; y 4. Efectividad de que la acción está prescrita. Hechos que lo acrediten.

Sexto: La demandante, con el objeto de probar los fundamentos de su demanda, rinde los siguientes medios de prueba:

Prueba Instrumental:

A folio 01:

1.- Certificado de nacimiento a nombre de don Gabriel Elizardo Ávila Sepúlveda, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 09 de abril de 2021.

2.- Certificado de nacimiento a nombre de don Roberto Iván Ávila Sepúlveda, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 09 de abril de 2021.

3.- Copia simple de página N° 331 del Tomo I del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

4.- Copia simple de página del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.

Prueba testimonial:

A folio 32:

Comparece a declarar doña **Angélica Berenice Rabanal Sepúlveda**, cédula nacional de identidad N° 7.533.646-2, pensionada, domiciliada en calle Las Camelias N° 145, comuna de Tomé, quien previamente juramentada expone:

Respecto del primer punto de prueba, que viene a declarar por Gabriel Ávila. Dice que ella iba al negocio de sus papás, cuando desapareció su hermano veía a su mamá muy triste y ella le contó lo que había pasado con su hijo, momento en que todo se derrumbó en la casa porque los otros hijos salieron a buscar a su hermano, quienes iban donde les decían que podía estar; la testigo veía que la señora y la familia sufrían demasiado. No hubo preocupación por la casa y el negocio ya que iban a cada parte donde les debían que su hijo podía estar, añadiendo que cuando se pierde un hijo, no se puede vivir igual.

Repreguntada la testigo sobre la relación que existía entre don Roberto y don Gabriel Ávila, responde que eran hermanos, que no se sabe dónde se encuentra actualmente don Roberto, que está desaparecido, sin embargo no sabe quién lo hizo desaparecer, solo que escuchó que fue detenido por agentes del Estado, siendo víctima



Foja: 1

de violación de derechos humanos en dictadura. Declara que no sabe fecha exacta, pero cree que don Gabriel y sus padres presentaron querellas criminales desde el año 1975 para encontrar a Roberto. Refiere que don Roberto Ávila desapareció en el año 1973.

Respecto del segundo punto de prueba, declara que hay daño moral y psicológico porque hay discriminación, porque no pudieron ser más una familia, que no hubo preocupación por los hijos que quedaron, ya que la mente estaba ocupada en otra cosa, en el dolor. Agrega que Gabriel le contó que lo discriminaron en el trabajo, tuvo que negar que fuera su familia.

Repreguntada la testigo, declara que desde que ella tenía 15 años conoce a la familia de Gabriel, porque ella iba a comprar al negocio, más o menos del año 1972 que los conoce. Consultada si notó algún cambio en la personalidad de los familiares de don Roberto Ávila una vez que este desapareció, comenta que la madre lloraba todos los días, cada vez que iba al negocio se notaba que había llorado mucho, y las hermanas igual. Expresa que la relación entre los hermanos era de amigos, porque Roberto era el mayor y Gabriel el menor, que eran muy compinches. Señala que Gabriel es una persona muy extrovertida, pero cuando hablaban de su hermano le afectaba mucho, y que en la adolescencia era “para adentro”. En cuanto a si don Gabriel sufrió el abandono de sus padres porque estos, desde 1973 se abocaron en la búsqueda de su hermano Roberto, la testigo declara que Gabriel no pudo seguir estudiando, no pudo llegar a la universidad, porque los padres estaban abocados a buscar a su otro hijo y, añade, que don Gabriel no tiene una tumba donde llorar a su hermano Roberto.

Comparece también doña **Irma Lucía Fernández Peñailillo**, cédula nacional de identidad N° 5.361.844-8, pensionada, domiciliada en Avenida Alessandri N° 2226, comuna de Tomé, quien previamente juramentada expone:

Respecto del primer punto de prueba, refiere que viene a declarar por don Gabriel Ávila. Relata que él tenía un hermano y está desaparecido, Roberto Ávila, quien estudió en la Escuela Normal de Chillán desde donde desapareció, lo hicieron desaparecer, agregando que seguramente fue la policía o los milicos, no lo sabe, eso es lo que le contó la mamá, quien sufrió mucho, porque lo buscó y nunca lo encontró, añadiendo que a todos los familiares les afectó.

Repreguntada la testigo, indica que ella piensa que fueron agentes del Estado quienes hicieron desaparecer a don Roberto, reconociéndose su caso en el Informe Rettig. Declara que don Roberto y don Gabriel eran hermanos, y que el primero desapareció en octubre del año 1973, no siendo encontrados, hasta la época, su persona o sus restos. Afirma que don Gabriel y su familia buscaron toda la vida, incansablemente a don Roberto, sobretodo su mamá, y que presentaron querellas criminales desde el año 1975 para saber qué pasó con Roberto Ávila.

Declara la testigo que conoce a la familia de don Gabriel Ávila desde hace 10 años, pero a la madre muchos años antes, porque tenía un negocio y ella pasaba a comprar desde 1973 en adelante.



Foja: 1

Respecto del segundo punto de prueba, declara la testigo que existió discriminación en los trabajos, pena y angustia, y que la madre lloraba cada vez que conversaba con ella.

Repreguntada la testigo para que diga cómo era la relación entre los hermanos Roberto y Gabriel, declara que era buena, y siempre tenían cara de angustia cuando se acodaban de su hermano. Expresa que la adolescencia de don Gabriel fue marcada negativamente por la pérdida de su hermano, porque se acordaba de él a cada instante. Refiere la testigo que la personalidad de don Gabriel y sus padres cambió a partir de la desaparición de Roberto, y que decían que la madre era muy alegre y después era pura pena. Preguntada la testigo acerca de si es efectivo que don Gabriel creció en soledad porque sus padres se dedicaron solo a la búsqueda de su hermano Roberto, responde afirmativamente, desconociendo si don Gabriel posee estudios superiores. Afirma que don Gabriel, a raíz del problema con su hermano, sufrió mucha discriminación laboral, porque tuvo que negar que Roberto fuera hermano de él, agregando que el actor trabajaba en el correo de Tomé y la consecuencia de reconocer que era hermano de Roberto Ávila, era el temor a que lo despidieran. Afirma que la pérdida de don Roberto le afecta, en lo emocional, hasta el día de hoy, a don Gabriel Ávila, porque cada vez que conversa de su hermano él se emociona.

Séptimo: Que la demandada rindió el siguiente medio de prueba para acreditar los fundamentos de su defensa:

Oficio:

A folio 14:

1.- Copia simple de oficio Ord. N°4792-2129, emitido por el Instituto de Previsión Social, de fecha 02 de julio de 2021.

Octavo: Que según se puede establecer de la discusión en la presente causa, ella se centra en cuestiones jurídicas y no sobre la fase fáctica, pues según aparece de la contestación efectuada por el Consejo de Defensa del Estado, no existe contradicción por parte de dicho órgano en orden a considerar al hermano del actor -Roberto Iván Ávila Sepúlveda- como sujeto pasivo de los hechos que se relatan en la demanda, cuestión que aparece reafirmada al ser reconocido don Roberto como una víctima de violación de los derechos humanos, conclusión a la cual arribó la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig). Esto último emana de los documentos que acompañó el actor a su demanda, los que no fueron objetados por la contraria y que se valoran conforme lo dispone el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, abonan lo que se ha venido señalando los atestados de los testigos, doña Angélica Berenice Rabanal Sepúlveda y doña Irma Lucía Fernández Peñailillo, quienes identificaron al demandante de autos como hermano de una persona que fue detenida y desaparecida con posterioridad al quiebre institucional ocurrido en el año 1973 en el país, dando razón de sus dichos, coincidiendo su relato con lo expresado en la demanda, de manera que, con los antecedentes que se han referido, el tribunal ha



Foja: 1

adquirido la convicción de que esos hechos realmente ocurrieron, apareciendo en los mismos, como víctima, el malogrado hermano del actor.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, lo anteriormente indicado tiene su correlato en el hecho de pública notoriedad que enseña que en el período que corre desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el retorno del país a la democracia se produjeron sistemáticas violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por Agentes del Estado, fundadas en razones de tipo políticas e ideológicas que han originado múltiples procesos judiciales iniciados con miras a obtener el castigo penal de los responsables de los delitos de torturas, secuestros, homicidios, detenciones ilegales y un sinnúmero de otras infracciones a la ley penal como también aquellos que buscan el resarcimiento de las víctimas desde la faceta civil, a través de las respectivas demandas de indemnización de perjuicios derivadas de los hechos delictivos antes mencionados.

La presente causa es, precisamente, una de estas últimas.

Décimo: Que, habiendo despejado lo concerniente a las cuestiones de hecho, corresponde, entonces, hacerse cargo de las excepciones opuestas por la demandada en la presente causa, comenzando por aquella referida a la preterición legal de quien aparece demandando en el juicio de marras.

En efecto, el Consejo de Defensa del Estado, al contestar la demanda, opone respecto de don Gabriel Elizardo Ávila Sepúlveda la excepción de improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal del demandante, hermano de la víctima, arguyendo básicamente que la Ley 19.123 determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo familiar más cercano, esto es: padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas; todo lo anterior, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas. Por su parte, apoya también su teoría en otras normas vigentes en nuestra legislación, como es la Ley N° 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y disposiciones sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil.

En suma, refiere la demandada, que la pretensión económica reclamada es improcedente porque, en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los hermanos de los causantes.

Undécimo: Que, con respecto a la preterición legal, de acuerdo a la jurisprudencia, al menos, desde el año 2016, se ha considerado que la referida excepción no tiene lugar cuando lo que se reclama es la indemnización por el daño moral proveniente de la responsabilidad estatal fundada en crímenes de lesa humanidad, como acontece en el caso de marras. En este orden de ideas, la Excma. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo ha expresado: *“QUINTO: Que resolviendo el recurso interpuesto, en relación a su primer capítulo, es necesario tener presente que los demandantes, hermanos y tía de la víctima, han invocado el dolor propio por el delito padecido por su familiar; acción indemnizatoria distinta de las*



Foja: 1

reparaciones previstas en leyes especiales para ciertos parientes de los ofendidos por violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, esta Corte tiene en consideración que la acción indemnizatoria planteada en estos autos tiene su origen en la perpetración de un delito de lesa humanidad, en que se persigue la responsabilidad del Estado por actuaciones de sus agentes que han cometido violaciones a los derechos humanos. De esta manera, el contexto en que los hechos fueron verificados - con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales impone su resarcimiento, y una decisión contraria conculca la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, beneficios de carácter económico o pecuniario. (En este sentido, SCS Roles N°. 20.288-14, de 13 de abril de 2015; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras).

Por lo demás, las acciones civiles aquí entabladas por las víctimas en contra del Fisco tendientes a conseguir la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados, encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa, en virtud de lo ordenado en los artículos 5°, inciso segundo, y 6° de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, de acuerdo a lo expuesto procede acoger el recurso en cuanto ataca la preterición legal de los actores -hermanos y tía de la víctima- adoptada sobre la base de una supuesta decisión del legislador que habría privilegiado el resarcimiento los familiares más próximos al afectado, ya que cada vez que se ha optado por establecer un orden legal respecto de beneficios o posibilidades de accionar existen disposiciones expresas que así lo resuelven, lo que en la especie no sucede, pues la única limitante que tienen quienes reclaman un daño sufrido como consecuencia del actuar de agentes del Estado es demostrar la existencia de dicho detrimento, de manera que formalmente basta con alegar su concurrencia y la relación con la víctima para plantear la pretensión, lo que en este caso está satisfecho". (Sentencia dictada en los autos Rol N° 6886-2016, de fecha 21 de julio de 2016).

Así las cosas, queda de manifiesto que el criterio jurisprudencial se encuentra asentado, en el sentido que todo daño moral causado por las violaciones a los derechos



Foja: 1

humanos -aun cuando se invoque el dolor propio por el delito padecido por un familiar, como es un tío o hermano- debe ser indemnizado.

Duodécimo: Que, conforme lo expresado en el considerando que precede, conviene tener presente, entonces, que el daño moral producido al hermano de una víctima de delitos de lesa humanidad, no admite ser negado a raíz de las eventuales omisiones que ha efectuado el legislador y que le afectarían, como lo es el establecimiento de determinados beneficiarios y su orden de prelación, así como la preterición de estos, según razona el Consejo de Defensa del Estado al contestar la acción incoada en autos.

Se está, en el caso de marras, frente al daño moral causado al actor por el secuestro y desaparición a manos de agentes del Estado de una persona (de quien solo se supo informalmente habría sido ejecutado) con quien tenía un vínculo fraterno, esto es, con quien se ligaba en un vínculo de parentesco de sangre (en los términos de lo preceptuado en el artículo 28 del Código Civil) al ser hijos de los mismos padres, situación que trastocó su vida a los 16 años de edad. Lo anterior, quedó acreditado con los certificados de nacimientos adjuntos a la demanda, los cuales no fueron objetados por la demandada, y que se valoran conforme lo disponen los artículos 1700 del Código Civil y 342 del Código de Procedimiento Civil.

Así las cosas, el desconocer para siempre el paradero de un hermano -conjuntamente con la aflicción que ello debe, evidentemente, haber provocado en los padres y demás núcleo familiar del actor- constituyen circunstancias determinantes en la formación y desarrollo personal de quienes le han sobrevivido, en este caso, don Gabriel Ávila Sepúlveda.

Encontrándose, por consiguiente, acreditado el hecho base -esto es, el vínculo de parentesco entre el actor de esta causa y don Roberto Ávila Sepúlveda- no puede más que arribarse a la conclusión de que la desaparición de este último, hasta la actualidad, provoca un menoscabo y afectación en la vida de quien detentaba un vínculo fraternal que lo unía a la víctima, siendo necesario que el Estado asuma la obligación de resarcir el daño causado a raíz de la responsabilidad que le concierne por el actuar de sus agentes, conforme lo relatado en la demanda de folio 1, y ratificado por las declaraciones de los testigos Rabanal Sepúlveda y Fernández Peñailillo presentadas por la parte demandante. La antedicha reparación será evaluada prudentemente por este sentenciador, atendida la dificultad intrínseca que implica determinar el dolor que un hecho como el descrito en autos, es capaz de provocar en quien lo ha padecido.

Décimo Tercero: Que como segunda alegación de fondo, el Fisco al contestar la demanda, opuso la excepción de reparación satisfactiva, estimando improcedente en su virtud la indemnización pretendida por el actor, pues -en su concepto- el demandante (aun cuando no ha tenido derecho a un pago en dinero, por la preterición legal también alegada por esa parte) ha sido ya indemnizado en cuanto al daño sufrido por el secuestro y posterior desaparición de su hermano, mediante el conjunto de reparaciones de diverso



Foja: 1

orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS, como refiere el escrito de contestación. En suma, expresa el demandado, dichas reparaciones han producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue, no pidiendo, por ende, ser exigidos nuevamente.

En relación a estas reparaciones, el demandante -lejos de desconocerlas- argumenta a partir de la existencia de las mismas indicando que ellas se refieren al cumplimiento obligaciones que en materia de Derechos Humanos contrajo el Estado de Chile, en virtud de instrumentos jurídicos que consagran el derecho a una reparación íntegra de las personas afectadas, como es la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ello, la reparación que alega el Fisco no puede ser considerada como tal, pues no hay transferencia de dinero ni otro tipo de asignación en que se haga referencia expresa a los hechos que se contienen en la demanda de autos, lo que trasunta en la inexistencia de incompatibilidad en la reparación efectiva del daño provocado por agentes del Estado en dictadura militar -que se pide en esta causa- y los beneficios obtenidos por las víctimas de estas acciones, o sus familiares como ocurre en el caso en comento.

Décimo Cuarto: Que, según aparece del oficio requerido por la demandada, el cual consta agregado a folio 14 de la carpeta electrónica, el Instituto de Previsión Social informó que, al 02 de julio de 2021, don Gabriel Elizardo Ávila Sepúlveda, no ha recibido beneficios de reparación en ese Instituto y que el referido es hermano del causante Ley Rettig, don Roberto Iván Ávila Sepúlveda, quien no ha recibido beneficios de reparación en ese Instituto, por cuanto los hermanos no están considerados en las Leyes números 19.123 y 19.980.

Décimo Quinto: Que, analizados los argumentos y alegaciones que ha vertido el Consejo de Defensa del Estado, puede concluirse que las argumentaciones en las cuales el Fisco asila su excepción no consagran en realidad un régimen indemnizatorio por concepto de daño moral que tenga por objeto la reparación de todas aquellas personas que sufrieron atentados como los que se han descrito en los presentes autos, sino que más bien parece apuntar a establecer un catálogo de beneficios y asistencias para ellas y quienes forman parte de sus familias, todo lo anterior enmarcado en los esfuerzos que ha realizado el Estado de Chile para enfrentar el conflicto humanitario y político generado con ocasión de los atropellos que sufrieron las personas que han sido considerados como víctimas por las respectivas Comisiones que se han formado para tales efectos. De esa manera, no se aprecia, en concepto del tribunal, una incompatibilidad entre los beneficios -de índole simbólico y de salud- a que alude el Fisco con la indemnización que en esta sede se solicita pues, como ya se dijo, esta última compensación deviene directamente de la particularidad y singularidad de los hechos que afectaron al demandante, en razón de su vinculación con su hermano desaparecido. Siendo así, no cabe sino rechazar la excepción de reparación satisfactiva opuesta por el demandado.



Foja: 1

Décimo Sexto: Que, en lo tocante a la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria incoada, no debe perderse de vista que los hechos que motivan la demanda son de aquellos configurativos de delitos de lesa humanidad, es decir, *“aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, de suerte tal que para la configuración de este ilícito existe una íntima conexión entre los delitos de orden común y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, porque la característica principal de esta figura es la forma cruel con que diversos hechos criminales son perpetrados, los que se contrarían de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad; destacándose también la presencia del ensañamiento con una especial clase de individuos, conjugando así un eminente elemento intencional, en tanto tendencia interior específica de la voluntad del agente. En definitiva, constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes”*. (Sentencia Excma. Corte Suprema de 25 de mayo de 2017, dictada en la causa Rol N° 78951-2016).

Asentado lo anterior, es de parecer del tribunal que no resulta aplicable la normativa interna en relación a la prescripción extintiva pues, de hacerlo, se estaría estableciendo un tratamiento diferenciado en relación a la procedencia de esa institución sobre un determinado hecho. En efecto, existe consenso en la jurisprudencia en el sentido de entender que las acciones penales que emanan de los delitos de lesa humanidad -como los que se han referido en la demanda de autos- son imprescriptibles, característica que proviene precisamente de la naturaleza del hecho de que se trata. Esta consideración emana de diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos que permiten la persecución de esta clase de delitos sin sujetarse a las reglas de la prescripción común. Siendo así, no puede sostenerse, sin romper la lógica y la coherencia en la aplicación de normas, que respecto a la acción civil que derive de esos mismos hechos sí sea procedente aplicar las normas que gobiernan la prescripción extintiva, pues *“ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental”*. (Sentencia Excma. Corte Suprema Rol N° 55213-2016).

Entender la aplicación de la prescripción extintiva de la acción civil que emana de un delito de lesa humanidad en los términos en que lo plantea la demandada implicaría que el hecho delictivo podría perseguirse de manera indefinida en búsqueda de la sanción penal pero no así desde la perspectiva civil, lo que escapa a la aplicación lógica del Derecho, de forma que no cabe sino razonar, como se ha referido anteriormente, que la acción civil, emanada de este tipo de hechos, sigue la misma suerte



Foja: 1

que la prescripción penal, debiendo entenderse, también, como imprescriptible, de manera que se desechará, igualmente, la excepción en comento.

Décimo Séptimo: Que, desechadas las excepciones opuestas por la demandada, corresponde avocarse entonces a la determinación de la existencia y, en su caso, del quantum del daño moral que se ha demandado por el actor.

Primeramente, desde la óptica de su conceptualización, el daño moral -instituto que no cuenta con una definición en la ley- ha sido progresivamente delimitado y especificado principalmente por la jurisprudencia y la doctrina. En efecto, *“si bien se ha resuelto en reiteradas oportunidades que no existe un concepto unívoco, su acepción más restringida se relaciona con el pesar, dolor o aflicción que experimenta la víctima y que se conoce como pretium doloris. Sin embargo, esta visión ha dado paso, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a considerar una concepción más amplia de tal concepto, a fin de reparar todas las especies de perjuicios morales y no sólo el pretium doloris, toda vez que en cada una de ellas hay atentados a intereses extrapatrimoniales diversos. Así, la profesora Carmen Domínguez Hidalgo ha manifestado sobre el punto: “Estamos con aquellos que conciben el daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma – física o psíquica –, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende pues el daño moral todo menoscabo del cuerpo humano, considerado como un valor en sí y con independencia de sus alcances patrimoniales”. Y agrega: “En suma, el daño moral estará constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una que se encontraba obligada a respetarlo”.* (“El Daño Moral”, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, páginas 83 y 84)”. (Sentencia Excma. Corte Suprema de 3 de febrero de 2022, dictada en Rol N° 36.875-2021).

En el asunto en estudio, de los hechos que relata el demandante en su libelo pretensor, el daño moral reclamado por parte de este, está configurado por la aflicción, el dolor, el menoscabo y la incertidumbre que a lo largo de los años le ha provocado el desconocimiento del paradero de su hermano, a consecuencia del actuar de los agentes del Estado, que mediaron en el secuestro y posterior desaparición, hasta hoy, de su hermano Roberto. Lo anterior, sumado a la afectación y quiebre emocional que dichos acontecimientos provocaron en el núcleo familiar de los hermanos Ávila Sepúlveda, lo que sin duda influyó en el desarrollo emocional del actor, condicionando su existencia, tal y como se ha expresado en el considerando Duodécimo y ratificado en autos con la declaración de las testigos Rabanal Sepúlveda y Fernández Peñailillo.

Huelga en este último punto señalar que la responsabilidad del Estado en la desaparición del hermano del actor, además de estar reconocida en autos, emana de las disposiciones contenidas en los artículos 6 de la Constitución Política de la República y 4° de la Ley N° 18.575.

Así las cosas, en base a lo que se ha venido razonando, aparece como de justicia otorgar por medio de esta sentencia una indemnización que permita mitigar el dolor y



Foja: 1

sufrimiento acaecido en la persona del actor, la que será fijada, en virtud de la prudencia y equidad, en la suma de \$15.000.000 (quince millones de pesos). Que la suma antes señalada, a fin que mantenga su valor adquisitivo y propenda a la reparación que se pretende, deberá reajustarse en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y el día del pago respectivo. Igualmente, se devengarán intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero no reajustables desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada y hasta que se concrete el pago.

Décimo Octavo: Que, en cuanto a la alegación del Fisco de Chile en orden a considerar al momento de fijar el quántum del daño moral los beneficios -de carácter simbólico y de salud- que se refirieron en la contestación de la demanda, ello será desestimado, bastando para dicha decisión lo que se señaló en su oportunidad: los beneficios que ha entregado el Estado de Chile a las víctimas de violaciones a los derechos humanos razonan sobre la base de ser compensaciones en cumplimiento de deber de reparación que pesa sobre él, mas no tienen la naturaleza de una indemnización de perjuicios que es lo que se solicita en este proceso, específicamente por el hermano de una de esas víctimas.

Décimo Noveno: Que no se condenará en costas a la parte demandada atendido a que no fue completamente vencida y, además, porque litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 1º, 5º y 6º de la Constitución Política de la República; 28, 1437, 1698, 1700, 2314 y siguientes y 2514 y siguientes del Código Civil; y 144, 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil, **se declara:**

I.- Que **se rechazan** las excepciones de improcedencia de la indemnización dineraria por preterición legal del demandante, reparación satisfactiva y prescripción extintiva opuestas por la demandada.

II.- Que **se acoge** la demanda enderezada al folio 1, solo en cuanto se condena a la demandada al pago de la suma de \$15.000.000 (quince millones de pesos) al actor, por concepto de indemnización por daño moral, más los intereses y reajustes indicados en el motivo Décimo Séptimo.

III.- Que no se condena en costas a la demandada por los motivos indicados en el considerando Décimo Noveno.

Regístrese, notifíquese, consúltese si no se apelare y, en su oportunidad, archívese.
Rol C-693-2021.



C-693-2021

Foja: 1

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Talca, veintitrés de Noviembre de dos mil veintidós.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: SXZYXCJXSTK